ción electrónica y qué consecuencias tiene que la contratación sea electrónica.

Finalmente, en el capítulo noveno, que trata los recursos contra la adjudicación, se incide en que la LCSP al transponer en un único texto legal tanto la Directiva 2014/24/UE como la Directiva 2014/23/UE, incorpora también las previsiones de esta última en materia de recursos. Además, ha roto con el tan criticado sistema dualista de recursos frente a la adjudicación, que diferenciaba drásticamente entre contratos SARA y no SARA. Asimismo, se ha suprimido con la distinción entre recurso especial y cuestión de nulidad.

Concluye el capítulo destacando una última novedad, la «administrativización» de los actos de adjudicación de todos los entes del sector público. La jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las adjudicaciones de los contratos que celebren todas las entidades del sector público, sean o no Administraciones Públicas y sean o no poderes adjudicadores.

Para concluir es preciso señalar que estamos ante una obra, que sin escatimar la dialéctica, profundiza desde una visión práctica en las novedades que introduce la LCSP. Las dificultades que plantea la legislación contractual y su aplicación práctica ponen de relieve, tal y como señala la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, la necesidad de mejorar y respaldar la profesionalidad entre el personal dedicado a la contratación pública.

El libro que se recensiona es una obra de referencia y una herramienta de primer orden tanto para los empleados de las entidades del sector público como para las empresas que operan en el ámbito del Derecho de la contratación del sector público.

Carmen AGOUÉS MENDIZABAL

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.110.2018.1.14>

MUÑOZ MACHADO, S. (Dir.), *Diccionario panhispánico del español jurídico*. Ed. Santillana. Madrid, 2017. 2 vols. (1060 y 2135 págs., respectivamente).

Producto de la fecundidad creativa del Catedrático de Derecho Administrativo y también Secretario de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha visto la luz muy a finales de 2017 esta monumental obra, de la que ahora haremos una brevísima reseña. Son más de dos mil páginas, con casi cuarenta mil entradas y vocabulario procedente de todos los países hispanoamericanos. Una labor de más de cuatrocientas personas, casi todas juristas, que han trabajado bajo la clara y firme orientación del director.

Su inmediato precedente es el *Diccionario del Español Jurídico*, que se había publicado un año antes. De hecho, incorpora la misma Presentación que éste: una muy docta exposición que da pormenorizada cuenta de los orígenes, remotos y recientes, de estos dos diccionarios jurídicos.

La obra está inspirada *lato sensu* al modo del (más conocido como) *Diccionario de autoridades* —el primero de la Real Academia, publicado en seis tomos que van de 1726 a 1739, y que, eliminados los ejemplos y sucesivamente actualizado, constituirá la base del actual *Diccionario de la lengua española*, con veintitrés ediciones desde 1780—, del que el académico Muñoz Machado nos desvela el relevante peso que tuvieron los textos jurídicos (muchos de ellos de clara impronta medieval e incluso anterior). Pues bien, este *Diccionario panhispánico* también pretende mostrar sustento, dar cuenta y ofrecer justificación del uso de los términos utilizados, como lo hiciera aquel, apoyando cada lema elegido en alguna o algunas fuentes (fundamentalmente, legales) que los avalen como «autoridad».

Frente a la tradición de los diccionarios enciclopédicos jurídicos clásicos, las definiciones recogidas son intencionadamente precisas y escuetas. Además, como desde su título se advierte, abarca términos utilizados a ambos lados del Atlántico e incluso palabras en lengua indígena, sobre todo si han sido incorporados a su Constitución (como es el caso sobre todo de Bolivia pero también Ecuador): qhapaj ñan, suma qamaña, teko kavi, shua...

Siguiendo al director en su Presentación, podemos señalar tres retos a los que pretendía responder un *diccionario jurídico*. A) Por un lado, mantener y revisar el vocabulario jurídico, en el que el de

carácter civil está estabilizado; sin embargo el lenguaje político, administrativo y constitucional ha sufrido grandes renovaciones y también está necesitado de vigilancia y revisión continua todo lo afectado por la europeización y la regulación de los mercados. A estos efectos se recuerda la Comisión de Léxico Jurídico, dirigida en su momento por Eduardo García de Enterría, que trabajó durante diez años, fruto de la cual fue la incorporación de casi trescientos lemas y acepciones en el Diccionario de la Real Academia. B) El segundo se refiere a la formación de un corpus jurídico abundante y actualizado, que no había como tal. C) En último lugar y en palabras de Muñoz Machado, «no tiene ningún sentido, en la actualidad, que la Academia no retome el inicial propósito de los padres fundadores de acometer, al término de su magna obra, *Autoridades*, y, si se quiere, el Diccionario de uso, la tarea de preparar diccionarios especializados. Por lo pronto, el acopio de materiales preciso para construirlos puede ser la manera más rápida y acertada de mejorar los corpus académicos. En el caso del derecho, un trabajo de este género podría acumular datos informáticamente ordenados de los que podrían derivarse muchas obras de utilidad, tanto para el trabajo general de la corporación como para grupos profesionales interesados. Ahora que las bases de datos no ponen límites a la información, el Diccionario electrónico de la Academia puede enriquecerse con todas las especialidades sin las limitaciones de volumen que imponían las ediciones impresas».

Estructurada de manera fácilmente asequible a la intuición en las búsquedas, va precedida de una «Guía de la obra», donde se da cumplida cuenta de cómo manejar la herramienta en la que consiste este diccionario. En su parte final, encontramos una recopilación de máximas y aforismos jurídicos; «latinajos» que no conviene erradicar —según Muñoz Machado— puesto que, frente a opiniones contrarias, resultan inevitables pues, al estar tan incorporados a nuestro acervo, mantienen su utilidad y permiten explicar de manera muy concisa conceptos muy arraigados. Termina la obra con una amplísima bibliografía especializada complementaria.

Tal y como ha sido concebida, y como el propio director ha señalado, el trabajo ahora reseñado se convierte en una tarea «inacabable», pues «no hay obra más incompleta que un diccionario, que es un libro vivo, necesitado de puestas al día».

Hay que felicitar y agradecer, una vez más, al profesor y académico Muñoz Machado, que hace bien poco ha publicado, además, otro monumental trabajo que merecería una atención específica; se trata de *Hablamos la misma lengua (Historia política del español en América, desde la Conquista a las Independencias)*. Ed. Crítica, Madrid, 2017.

Edorta COBREROS MENDAZONA

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.110.2018.1.15>

SERRANO LASA, Iñaki, *La configuración jurídica de la ciudad compacta a través de las dotaciones urbanísticas*, HAAE/IVAP, Oñati, 2017, 564 págs.

El incremento de la desigualdad, las migraciones forzadas, la expansión de los asentamientos informales o el cambio climático son algunos de los desafíos clave que, según augura el último *Informe Mundial de las Ciudades* publicado en 2016 por ONU-Habitat, agencia de las Naciones Unidas encargada del desarrollo urbano, habrán de afrontar las ciudades en las dos próximas décadas.

Con la idea de proporcionar una respuesta a los citados desafíos y bajo el auspicio de la mencionada agencia, en el seno de la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible *Habitat III*, se adopta en Quito, en octubre de ese mismo año, la *Nueva Agenda Urbana*, que es refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 71/256, de 23 de diciembre de 2016. Esta Nueva Agenda Urbana promueve una ciudad compacta, conectada, integrada e incluyente, en el ámbito de una urbanización sostenible, para cuya consecución propugna como pilares básicos la estructura legal y reglamentaria y el planeamiento urbano (planificación y diseño urbano), junto con la sostenibilidad del modelo económico y financiero.

Precisamente, la Declaración adoptada el 13 de febrero de 2018 con ocasión de la clausura de la no-